

# EL MUNDO

Viernes, 7 de mayo de 2004. Año XV. Número: 5.263.

## OPINION

### TRIBUNA LIBRE

# El precio del petróleo amenaza nuestro crecimiento

ROBERTO CENTENO

En términos de dólares, el petróleo se ha situado esta semana en su nivel máximo desde octubre de 1990, después de la invasión de Kuwait. No obstante, estas subidas no han sido debidas a un problema físico de abastecimiento, sino a los movimientos especulativos en el denominado «mercado de papel», mucho más importante hoy que el mercado físico, y constituido por las operaciones con opciones y futuros en los mercados financieros, cuyos niveles se han disparado por el temor a que se produzcan interrupciones en los suministros, consecuencia de los últimos ataques -todos fallidos- en Irak y Arabia contra objetivos específicamente petroleros, de los enfrentamientos étnicos en Nigeria -el mayor productor de Africa-, de la inestabilidad política en Venezuela y de la amenaza de minado contra el terminal petrolero de Batumi (Georgia) en el mar Negro, que exporta 200.000 barriles/día, a lo que se añade una demanda récord de gasolinas en EEUU que consume el 45% mundial.

Por esta razón la mayoría de los analistas estima que si los precios estuvieran fijados sólo por la oferta y la demanda físicas el nivel de precios al día de hoy se situaría en el entorno de 25 \$/barril, ya que en el mercado físico y después de la reducción de 360.000 barriles/día en marzo, en abril, después que la OPEP dejara en libertad a sus miembros para incumplir las cuotas, la producción ha superado en más de 2 millones/día el límite fijado en 25,75 millones, lo que desgraciadamente no excluye que los precios actuales se mantengan o incluso suban por encima de los 40 dólares, si la incertidumbre continúa.

Es evidente, que si esta situación se prolonga unos meses el crecimiento económico se vería afectado. En teoría, en la zona euro el efecto tendría que ser menor, ya que nuestra moneda se ha apreciado en más de un 20% frente al dólar durante el último año. Sin embargo, el peor funcionamiento de muchas

economías europeas por razones estructurales hace que el efecto pueda acabar siendo mayor y del orden de medio punto del PIB.

Este mal funcionamiento, como acertadamente vienen señalando la mayoría de economistas liberales que han buscado una explicación al estancamiento de las economías europeas frente a las de EEUU y Asia, tiene su origen en que éstas no han sido nunca verdaderas economías de mercado, sino economías basadas en lo que denominan «sistemas de relación», un modelo practicado en parte de Europa tanto por los gobiernos socialistas como por los no socialistas, y cuyo problema es su incapacidad de adaptarse a cambios rápidos en el entorno y en la tecnología, como los ocurridos desde los años 90, y pierden competitividad, ya que lo único realmente probado es que cuanto más competitivos y abiertos son los mercados, mayor es su capacidad de crecimiento y más igualitario el reparto de la riqueza.

Un sistema de relación se caracteriza fundamentalmente porque en él el poder político otorga parcelas de poder monopolístico a la oligarquía empresarial y financiera, la cual garantiza a su vez, junto con el Gobierno, un nivel de bienestar razonable, aunque no de empleo, a la clase trabajadora. De esta forma, Gobierno, oligarquía y sindicatos se sienten satisfechos, lo que proporciona estabilidad social y, también, cuando los cambios de entorno son graduales permite una buena oportunidad de crecimiento. Pero este tiempo ha pasado. Tanto que el gran objetivo de la Cumbre de Lisboa en marzo de 2000 de convertir la UE en el 2010 en la economía más competitiva del mundo es una auténtica broma. Desde entonces la distancia con EEUU no ha hecho más que crecer.

En el caso de España, la oportunidad de cambio del sistema de relación se produce con la incorporación de España a la Comunidad Europea, ya que en teoría los monopolios iban a desaparecer y la competencia a introducirse a todos los niveles. Sin embargo, nada de ello sucedió. Los monopolios privados crecieron y se consolidaron con el proceso de fusiones, impulsado desde el poder político. Mientras, los monopolios públicos con precios regulados fueron sustituidos por monopolios privados con precios libres, en un proceso privatizador que constituye el mayor escándalo económico de nuestra Historia, por lo que la competencia en los sectores esenciales no se produjo. La gran apuesta política fue el fortalecimiento de grandes empresas capaces de actuar en los mercados internacionales financiadas por la explotación de un monopolio interno, opción radicalmente incompatible con la competencia. El sistema financiero, constituido en más del 50% por un sector de cajas de ahorros totalmente politizadas, no operando con criterios de rentabilidad muchas de ellas, permanecería intacto.

En este sentido, el gran desafío para Solbes va a ser cómo sustituir un modelo basado en la demanda interna, sostenida por tipos de interés en mínimos históricos y que está llegando a su fin, por otro más competitivo y apoyado en la exportación, que permita mantener el crecimiento. Eso sólo será posible convirtiendo nuestra economía de relación en una economía de mercado.

Hablar, como dice el programa socialista, de invertir más en I+D o en mejorar la enseñanza es un brindis al sol, ya que se necesitaría una generación para que este impulso se empezara a notar. Por otro lado, la tecnología esta disponible en el mercado; los países asiáticos apenas invierten en I+D y están creciendo vertiginosamente. Y en cuanto a la enseñanza, mejor no tocarlo. Fueron las reformas socialistas las que a principios de los 80 hundieron de forma irrecuperable la enseñanza pública en España en todos sus niveles. Hoy a nuestro sistema educativo sólo le salvan las instituciones privadas.

El procedimiento más rápido de que dispone para mantener el crecimiento y ganar tiempo es la sustitución del objetivo de déficit por otro de deuda, lo que le permitiría bajar impuestos y mantener la demanda interna. Sin embargo, aunque el objetivo de déficit sea una estupidez sin ningún sentido económico, lo que es muchísimo más disparatado es sustituirlo por un hipotético respeto del déficit cero «a lo largo de la legislatura», ya que esto ni es serio, pues ciclo económico y legislatura no son lo mismo, ni es cuantificable -¿de qué hablamos, de cuatro, de ocho o de 12 años?- ni es operativo -¿cómo se controla el gasto anual?-. Si el nuevo equipo económico no quiere perder toda su credibilidad, debe sustituir un objetivo claro y medible (déficit) por otro igualmente claro y medible (deuda). La alternativa propuesta sería una auténtica chapuza, impropia de un ministro que ha sido defensor a ultranza del rigor en el cumplimiento del Plan de Estabilidad.

Pero esto es sólo temporal, ya que lo esencial son las reformas estructurales que permitan reducir el coste de los principales inputs. Como señalaba recientemente The Economist, las dos grandes asignaturas pendientes de la economía española son la liberalización de los sectores energético y financiero. La escalada de los precios del petróleo convierte al sector energético en una auténtica prioridad, ya que el impacto de estas subidas puede ser muy superior para nuestro país -el profesor Velarde lo ha estimado en un 0,7% del PIB- en primer lugar porque la dependencia del petróleo y del gas natural es muy superior a la de la UE y en segundo lugar porque ambos mercados están férreamente controlados por un oligopolio cuyo resultado práctico es que los precios al público antes de impuestos están -con raras excepciones debidas a presiones del Ejecutivo- por encima de la media de la UE y muy por encima de la de los países centrales como Gran Bretaña, Francia o Alemania. Y lo que es mucho peor, muy por encima de algunos de los 10 países que acaban de

incorporarse y que van a disputarnos nuestros principales mercados exportadores y la reubicación de muchas de nuestras industrias.

En términos cuantitativos, desde la publicación del Real Decreto Ley de Intensificación de la competencia de junio de 2000, la disposición legal más importante en materia de liberalizaciones, se ha producido una fuerte concentración del poder monopolístico. En el sector petrolero, la cuota de mercado del oligopolio ha pasado del 76% al 87% en el mercado total, y en estaciones de servicio la cuota de mercado, se estima, ha pasado del 84% al 89%, llegando al 95% en las grandes ciudades como Madrid o en la red de autovías y autopistas, concentración que se elevará aún más con la próxima salida de Shell de nuestro mercado. Adicionalmente, las concertaciones de precios han destruido prácticamente a todos los operadores independientes, por lo que la posibilidad de competencia real ha desaparecido.

En el sector gasista, la cesión del 25% del gas argelino por Gas Natural con un margen de un 80% convierte al resto de operadores en meros revendedores sin posibilidad de competir, lo que en términos prácticos ha consolidado su poder monopolístico.

En el caso del sector eléctrico, la situación es más grave si cabe, ya que a la consolidación del oligopolio se añade una planificación disparatada que está llevando los costes y la seguridad a niveles incompatibles con la competencia y que va a producir un daño irreparable al crecimiento y al empleo, pues al contrario que las estructuras monopolísticas la planificación una vez realizada ya no tiene solución. Además, si el Gobierno quiere ser coherente, el mayor problema ecológico del planeta, ya que amenaza la vida de cientos de millones de seres, es el calentamiento global, por cuya razón la prioridad en la generación eléctrica debería ser reducir las emisiones de CO<sub>2</sub>, lo que significa la no utilización del carbón y del gas natural, con lo que las únicas alternativas, pues no originan efecto invernadero, son la energía nuclear y las renovables, que además son complementarias.

La oposición a la energía nuclear, que es lo supuestamente progresista, deriva exclusivamente de la ignorancia de unos y la incompetencia de otros, unida a un sentimiento irracional similar al del hombre primitivo respecto del fuego. Así, la energía nuclear tiene muchos menos riesgos para el entorno y para el medioambiente que el gas natural y la eólica. Los terminales de gas licuado, de los que España tendrá más que toda la UE junta y los metaneros que lo transportan originarían una catástrofe incomparablemente mayor sobre el entorno en caso de accidente o atentado terrorista que una central nuclear. En EEUU, que va a tener que importar cantidades ingentes de gas licuado, las plantas se construyen en islas artificiales a 10 o 20 kilómetros de la costa. En

España las tenemos al lado de las ciudades. Y respecto a la eólica, ésta daña seriamente a los ecosistemas y al paisaje, y aniquila la vida animal en su entorno.

Y lo que resulta crucial, el Kwh. generado con gas licuado cuesta casi el doble (33 euros/Mwh) del generado con nuclear (20 euros/Mwh para centrales nuevas) y el eólico tres veces más (66 euros/Mwh). La moratoria nuclear nos costó a los consumidores un billón de las antiguas pesetas, el valor total de las centrales pero sin que éstas fueran concluidas. Y, lo que es mucho más grave, ha elevado el precio de la electricidad generada, en forma permanente, en más de un 20% -al tener que ser sustituidos 5.000 Mw de potencia con un coste de 10 euros/Mwh por otras energías mucho más caras- y ha aumentado las emisiones de CO2 en 30 millones de toneladas/año, aparte de incrementar nuestra dependencia exterior.

En comparación con nuestros principales competidores, los precios de la electricidad en el mercado mayorista son un 50% superiores a los de Francia y Alemania y un 40% a los del Reino Unido y con la planificación en marcha y el cierre de las nucleares se irán a más del 100%. Este es el coste económico de la demagogia que sacará de competencia a nuestra economía, y enviará al paro a cientos de miles de trabajadores en los próximos años.

En definitiva, la actual escalada de los precios del petróleo y del gas natural es un serio aviso para nuestro Gobierno, tanto por la amenaza que representa para nuestra estabilidad económica y nuestra seguridad un grado de dependencia exterior tan elevado -que la nueva planificación energética elevará aún más- como por los diferenciales de precios con nuestros principales competidores, que han venido siendo junto con las subidas excesivas de salarios las razones principales del bajo crecimiento de nuestra productividad, el más reducido de todo el mundo desarrollado y la más seria amenaza para nuestro crecimiento futuro.

En una perspectiva a 10 años, es inconcebible que ni siquiera se plantee la opción nuclear, algo imprescindible tanto por costos como por seguridad. El ignorarlo nos lleva a una situación energética imposible, que en el mejor de los casos será un lastre a nuestra productividad y crecimiento y en el peor puede llevarnos al colapso.

**Roberto Centeno es catedrático de Economía de la Escuela de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid.**

© Mundinteractivos, S.A.